

EN EL CENTRO DEL *HONDO CRISOL DE LA  
PATRIA*: MOVIMIENTO OBRERO Y ALLENDISMO  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE “LA VÍA CHILENA AL  
SOCIALISMO” (1956 – 1970)

*Luis Thielemann Hernández*

LUIS THIELEMANN HERNÁNDEZ

Historiador de la Universidad Católica de Chile y doctor (c) en Historia por la Universidad de Chile. Es académico de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae. Sus áreas de especialidad son la historia social de Chile y del Cono Sur en el siglo XX. Es autor de *La anomalía social de la transición. Movimiento estudiantil e izquierda universitaria en el Chile de los noventa (1987-2000)* (2016).

EN EL CENTRO DEL *HONDO CRISOL DE LA PATRIA*:  
MOVIMIENTO OBRERO Y ALLENDISMO EN LA  
CONSTRUCCIÓN DE “LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO”  
(1956 – 1970)

I

En medio de una entrevista con Rossana Rossanda en el palacio de La Moneda, Salvador Allende anuncia que debe partir hacia Chuquicamata, para intentar detener una huelga del sindicato obrero del mineral de cobre, que demanda un aumento salarial de entre el 50 y el 70 por ciento. “No se puede hacer. Yo se lo voy a decir. ¿Y por qué se tienen que ir a la huelga? ¿Con quién están en guerra? Ahora son los dueños de la mina”, le dijo Allende a la intelectual italiana antes de retirarse. “Ellos no son los dueños, camarada presidente. Es el Estado”, respondió Rossanda. “El pueblo es el amo”, insistió el presidente. “Bueno, camarada presidente. Lo es, ¡lo será!” , cerró el debate la italiana (Rossanda, 1971).

Los obreros aparecen en todo el imaginario de los años de la Unidad Popular (1970 – 1973, en adelante, UP). Hombres — algunas veces también mujeres— de rostros duros pero alegres, con casco y ropas de trabajo, destacan regularmente en las fotografías y filmes del período. En la enumeración de personajes que, según el himno de la coalición de Salvador Allende y los partidos marxistas —“Venceremos”— iban a cumplir con su deber, los obreros coronaban el listado que incluía “Campesinos, soldados, mineros / La mujer de la patria también / Estudiantes, [y] empleados”. La clase obrera y su poderosa historicidad de lucha, copaba cada escena posible de concebir en un Chile que aseguraba estar haciendo la revolución para ellos y los demás proletarios. Pero al igual que las palmeras copan todo el fondo y extremos de una escenografía de lo tropical sin nunca saltar al frente, los obreros parecen ser la razón y el sentido de la Unidad Popular, pero nunca, sino hasta el breve período de auge de los Cordones Industriales (octubre de 1972 a junio de 1973), son los protagonistas de la historia. Los obreros no tuvieron historiadores, como sí tuvo la universidad de la reforma de 1967. Los obreros tampoco fueron los más pobres, los más estéticamente sufridos de la larga década de 1960 (como los pobladores), para así suscitar la piedad intelectual de la historiografía social. Menos fueron los más evidentemente antioligárquicos, como los campesinos pobres, desplegando luchas complejas y de un pesado clasismo difícil de generar empatías. La historia del movimiento obrero es un arsenal oculto, todavía esperando a ser conocido como quien aprende a disparar.

¿Cuál fue el rol del movimiento obrero en la construcción de la UP durante la larga década de 1960, así como en el triunfo de Salvador Allende en 1970? En lo que sigue, se presentan antecedentes para comprender cómo ambos hechos son parte central de un proceso mayor de ascenso político del movimiento popular en Chile. De una amplitud formal y de praxis inédita, la promesa de la vía chilena al socialismo se fue desarrollando basada en el fortalecimiento de dos componentes fundamentales: el allendismo como expresión electoral de masas desde 1958, y la radicalización y masificación práctica del movimiento obrero, como prefiguración, desde 1957, de una revolución, o incluso, del socialismo. El recuerdo de un protagonismo obrero en la construcción de una subjetividad de masas afín a una revolución roja en democracia, que permitió la mayoría simple de septiembre de 1970, se ha ido opacando con los años, y el texto que sigue busca revertir dicho desconocimiento.

## II

Los obreros chilenos de la segunda mitad del siglo XX, como los de casi cualquier lugar del mundo, eran en su mayoría paganos y rojos. Paganos, porque ni religión ni ideología se tomaban muy en serio, y producían mezclas de una moral de clase abigarrada históricamente. Rojos, porque a pesar de lo anterior, la gravedad de las fronteras de clase y contra los patrones, era real. No todos los obreros, ni la mayoría siquiera, era simpatizante de los comunistas, pero los cuadros marxistas en la faena tenían el respeto de sus compañeros de trabajo debido a su rol en las peleas contra los patrones, condición que se acrecentó con la represión de la Ley Maldita (la legislación anticomunista de 1948 a 1958). El 12 de diciembre de 1957, un artículo editorial de *El Mercurio* se quejaba amargamente de cómo los comunistas y “agitadores” despedidos de las salitreras vía Ley Maldita, eran recibidos por las comunidades obreras de vuelta en las mismas, disfrazados como comerciantes ambulantes, habitando en campamentos llenos de cómplices. El medio ejemplificaba dicho problema con la designación como dirigente sindical de una oficina, de un joven de 18 años, barrendero, de reciente contrato, solo porque era militante comunista. La militancia obrera del Partido Socialista en muchos centros de trabajo corría similar suerte, cuando los patrones acusaban su belicosidad sindical como prueba de su pertenencia al PC, y así hacer válido el veto a los candidatos de izquierda a elecciones sindicales o el despido de los dirigentes más belicosos. Mucho más allá de la influencia de los militantes anarquistas, socialistas, comunistas o trotskistas, la cultura roja del movimiento obrero era algo extendido y asentado en instituciones propias. Aquello no pudo ser removido en los años de la Ley Maldita,

y, por el contrario, es posible establecer que reforzó el sentido de “diferencia” del movimiento obrero respecto del resto de la sociedad, tanto en su clave misional revolucionaria como en un clasismo más tosco y materialista.

La crisis económica de 1955 y la circular Yáñez-Koch del mismo año (que fortalecía la alianza entre empresarios y policía política, con el aumento de la capacidad de intervención legal sobre los sindicatos), tendieron a reducir aún más el margen de maniobra del movimiento obrero. Cancelados los canales institucionales construidos entre los años de Ibáñez y los del Frente Popular (1924 – 1941) para el procesamiento del malestar obrero, a las franjas organizadas no les fue quedando más alternativa que la ruptura. El desarrollo, hacia la segunda mitad de la década de 1950, de una valoración práctica de la ruptura con el orden del patrón y también con la ley, tuvo que ver bastante con el cierre del Estado hacia el movimiento obrero. A su vez, fue del todo importante que los sectores más militantes de la clase obrera tuvieran fresca la memoria respecto de los ásperos recursos que, tan solo un par de décadas antes, les permitían imponer su interés cuando la política estaba del todo cerrada a sus reclamos. De esa forma, el surgimiento común y codeterminado del allendismo y de la radicalización del movimiento obrero, puede entenderse también como el paso de la crisis de la dirección del movimiento obrero a la producción de una nueva alternativa política teñida de rojo desde abajo hacia arriba.

Al igual que con el Frente Popular en 1936, fue en la construcción de organización en el movimiento obrero que la izquierda y grupos progresistas encontraron unidad política. El allendismo, así también, puede afirmar que sus primeros pasos como proyecto unitario de las izquierdas estuvieron en la fundación de la CUT en 1953. El 18 de noviembre del año anterior, el Comité de Unidad Sindical convocó a un congreso constituyente, y luego de combativas huelgas de panaderos y obreros del carbón en el verano de 1953, entre el 12 y el 15 de febrero, se fundó la Central Única de Trabajadores, “una Central Única independiente de cualquier gobierno, libre del tutelaje de partidos políticos”, como dirá en su manifiesto de noviembre de 1952. Pero a pesar de esta intención, es el acuerdo político expreso de la militancia sindical comunista y socialista, y también de la minoría trotskista y anarcosindicalista, lo que permite la creación de la Central en su Congreso Constituyente (Arrate y Rojas, 2003). Además, desde el Ministerio del Trabajo, el esfuerzo organizativo fue apoyado por el socialista Clodomiro Almeyda, quien sostuvo el cargo, a pesar de las diferencias políticas del socialismo con el presidente Ibáñez, hasta apenas veintitrés días después de la fundación de la Central. Cuatro años más tarde, y en medio de una feroz represión al sindicalismo, los dos grandes partidos rojos, junto a varios movimientos de izquierda, se unieron para formar el Frente de Acción Popular, FRAP. Este referente electoral, que en sus inicios contuvo a buena parte de la unidad original que formó la CUT, y que se había galvanizado en la comunidad de víctimas

de la represión bajo la Ley Maldita, es la base militante y de masas sobre la que se constituyó el allendismo.

Desde el 5 de enero de 1957 y durante casi todo el verano de ese año, hubo protestas por el alza del pasaje de la locomoción, que a su vez simbolizaba una serie de alzas en los bienes y servicios básicos. En un comienzo eran pequeños grupos estudiantiles y obreros, pero, con el correr del verano, a la protesta se fueron unieron desempleados, organizaciones de mujeres pobladoras, jóvenes sin trabajo ni escuela, etcétera. En fin, todo el universo proletario de Santiago, que ya entonces era una metrópolis latinoamericana, con casi dos millones de habitantes censados en 1960, unos seiscientos mil más que en 1952 y más del doble que dos décadas antes (Dirección de Estadística y Censos, 1964). La multitud de la nueva gran periferia de la ciudad crecía por cientos de miles, no solo en Santiago, también en Concepción y Valparaíso. El allendismo, si bien tuvo una importante presencia en las zonas rurales, fue un fenómeno de masas urbanas, no solo porque allí habitaba la mayoría de sus bases, sino porque allí se desplegó de forma vital una cultura roja, clasista, moderna y modernizante. Aquel universo proletario fue nutriendo la protesta a lo largo del verano para, luego de una pausa generada por la promesa presidencial de suspender las alzas, desatarse con furia en las calles entre el 29 de marzo y el 4 o 5 de abril de 1957, según la zona de la ciudad, debido a un nuevo anuncio de alzas del precio del pasaje de transporte. La revuelta de abril de 1957, caracterizada por la violencia y saqueos del día 2 ocurridos tras conocerse el asesinato por balas policiales de Alicia Ramírez, mostró una nueva subjetividad popular urbana. Estaba marcada por la rebeldía que desbordaba los escasos canales institucionales y también las estrategias y tácticas de partidos. Aunque entonces la mayoría de los partidos de izquierda anclados en el movimiento obrero culparon de los disturbios y saqueos ocurridos durante la revuelta a un indefinido “lumpen”, o bien a “provocadores fascistas”, las fuentes dan cuenta de que los protagonistas de la revuelta no eran una otredad política respecto del movimiento obrero, sino sus anillos de influencia y sociabilidad más cercanos, el universo proletario que mencionamos más arriba. La nueva gran periferia de Santiago y otras grandes ciudades del país anunció su existencia con violencia y rabia, reclamando derecho a ser tratados como los ciudadanos reales de una capital dependiente que se había prometido el desarrollo. Como dijo recordando los hechos un dirigente de los estudiantes secundarios vespertinos de 1957: “Había ahí una masa con odio, con mucho resentimiento” (Milos, 2007: 408). Esa masa está en el centro del allendismo.

Fueron los mismos grupos, pero mejor organizados por una importante franja de militantes comunistas, los que meses más tarde se tomaron la chacra La Feria en la zona sur de Santiago. Construyeron lo que se conoció al poco tiempo y hasta el presente como la Población La Victoria. Un barrio autónomo desde la toma hasta

el último ladrillo de cada casa, construido “a la plebeya”, saltando sobre el derecho de propiedad y las fronteras de la ciudad sanitizada; era la primera confirmación de que una nueva ofensiva del movimiento popular estaba en marcha. Se trataba de que este paso al ataque sería explícitamente desbordando las instituciones y la legalidad, poniendo en marcha diversas tácticas de acción directa, que buscaban en lo inmediato la realización de intereses básicos de trabajadores empobrecidos y, en boca de los militantes, prefiguraban una nueva sociedad revolucionaria. Es lo que Alexis Cortés (2014) ha denominado la ejemplaridad de La Victoria en el movimiento popular de la década de 1960.

Un año más tarde vino la segunda confirmación del cambio de fase que se había iniciado con la revuelta de abril de 1957. En las elecciones de 1958 se confirmó la popularidad del candidato de los partidos marxistas agrupados en el FRAP, Salvador Allende, quien consiguió el apoyo de más de un tercio de los electores, siendo sus fuertes las ciudades obreras y los lugares de concentración de campesinos pobres. No solo fue una movilización electoral. El allendismo fue una fuerza social muy dinámica entre las bases del universo proletario ligado al FRAP desde el comienzo del debate sobre quién debía ser el candidato de la coalición. Allende se impuso desde los dirigentes sociales y militantes de base hacia las direcciones partidarias, incluso en partidos de tradición vertical como el PC (Fernández Abara, 2015). De ahí en más, Allende era el candidato indiscutible para el movimiento popular. El allendismo se convirtió en una especie de referencia política que permitía agrupar a toda la multitud popular que se organizaba en torno al movimiento obrero y su tradición de lucha, pero, sobre todo, a su identidad clasista roja. El allendismo también era la referencia electoral de una serie de movimientos de acción directa que, como los pobladores y las tomas de terrenos, o los obreros que agudizaron sus demandas durante la larga década de 1960, expresaban una forma de acción política que combinaba pasos institucionales con otros que desbordaban los canales formales o derechamente los negaban. El allendismo, inaugurado así en el bienio de 1957–58, fue una expresión electoral de un nuevo estadio en la historia del movimiento popular; una expresión de masas principalmente urbanas, de una fuerte identificación clasista y de discurso de izquierda revolucionaria. El evento de cierre de la campaña electoral de 1958, ocurrido el día 1 de septiembre en Santiago, dio cuenta de esta movilización popular enorme, en que la imagen de masas era un argumento poderoso por sí mismo. *El Mercurio* del 2 de septiembre de ese año lo describió así:

“La historia de las jornadas cívicas realizadas en nuestro país no registra un acto similar, o siquiera parecido, al de anteaer.

[...]

La demostración de fuerzas del allendismo se hizo a base de las inmensas legiones de allendistas del Gran Santiago. No había posibilidad ninguna de traer contingentes de manifestantes de otras partes, por la simple y concluyente razón de que en todas las ciudades y pueblos de Chile se hacían actos similares. Es decir, no se podía inflar una concentración —la de Santiago— en desmedro de otras. Habría sido un absurdo”.

En la misma edición, el periódico conservador destacó que la candidatura de Allende realizó en barrios y calles de Santiago una “exposición con fotografías captadas durante el desarrollo del acto último. Esto permitirá a quien quiera ver la autenticidad de los gráficos obtenidos apreciar la verdadera magnitud del acto allendista”. Masas en la calle, ocupaciones y movilización electoral, eran al inicio de la década de 1960 y de la construcción de la “vía chilena al socialismo”, los pilares fundantes del allendismo como referencia política popular.

### III

No se trata de caer en la adoración al “ídolo de los orígenes” del que hablaba Marc Bloch, es decir, en creer que la explicación del origen del allendismo, entre las luchas sociales levantadas por el movimiento obrero y la inédita movilización electoral del FRAP en 1957–58, basta para comprender la particular forma de la “vía chilena al socialismo”. Se trata, eso sí, de comprender la confianza en una estrategia para alcanzar los intereses de las clases populares, combinando el avance institucional de una alternativa socialista con la realización material, vía acción directa y movilización desbordada, de tales intereses. Esto, sin duda, portaba una contradicción que se haría fatal hacia el final del gobierno de Allende, pero eso era algo desconocido a inicios de la década de 1960, y fue considerado más una oportunidad, el resultado de una audaz creatividad, que un problema de difícil solución. El allendismo portaba esa contradicción a consciencia, y era intolerable para quienes vivieron esos años atrapados en el debate estratégico de “las vías” al socialismo, tanto para quienes se acercaban más a una estrategia de ruptura armada, como para los que se inclinaron por un camino estrictamente institucional.

Tres años después de los resultados electorales de 1958 y bajo la fuerte represión del gobierno de Alessandri, ocurrió una ruptura en la dirección de la CUT que permite ejemplificar la fuerza estratégica de la combinación herética del allendismo. El 22 de agosto de 1961, el Consejo Nacional de Federaciones de la CUT llamó a paro nacional para el 29 de ese mes. La noche del día 28, un nuevo Consejo, convocado por la mayoría comunista y con casi su única participación, canceló la



movilización. Clotario Blest insistió. Al día siguiente, salvo algunas escaramuzas, el paro fue un fracaso. Ante esa situación, Blest renunció de inmediato, acusando que:

“[...] mientras algunos estimamos que es necesaria una acción directa masiva, determinada a provocar un cambio sustancial en profundidad y en extensión de la estructura económica, social y política del país, los otros creen que esto mismo se puede alcanzar a través del actual régimen de legalismo y pseudodemocracia burguesa y corrompida en que se debate el país” (Gonzales Torres y Daire Tolmo, 1984).

Estas diferencias tan fundamentales para Blest y su grupo, no lo eran para las bases del movimiento obrero ni para la mayoría de sus franjas organizadas. Cuando fracasó el paro de agosto de 1961 y Blest renunció a la presidencia, si bien hubo molestia en algunas bases y militantes, no se produjo mayor revuelo en el sindicalismo. Mientras para Blest era intolerable un movimiento obrero que sirviera de base movilizada para una apuesta electoral, para el FRAP no era mayor molestia un movimiento obrero que se radicalizaba en las luchas de vez en cuando. Así, venció el bando que aceptó la contradicción de caminos de lucha en el movimiento popular, que toleró su movilización electoral institucional y apoyó en primera línea su tendencia a la acción directa y la huelga ilegal. Blest no fue derrotado por no tener el apoyo de la mayoría obrera, que lo tenía en tanto líder carismático y referente moral. Fue derrotado porque mientras el FRAP ofrecía una forma de procesar institucional y pacíficamente las demandas de su movilización radical, en una articulación que se imaginaba armoniosa, el bando de Blest no ofrecía sino más que una ofensiva revolucionaria de escasas posibilidades reales de triunfo y sin antecedentes en la historia de Chile. El *ensemble* de acción directa y movilización electoral fue un camino que disciplinadamente seguía la mayoría del movimiento obrero como estrategia política, y eso era ya evidente en las disputas políticas internas del movimiento obrero hacia 1961.

En específico, el movimiento obrero fue fortaleciendo estas opciones; por una parte, aumentando su influencia electoral, y por otra, profundizando el camino del hostigamiento al patrón con huelgas y ocupaciones que cruzaban cada vez más las fronteras de la legalidad. En la práctica, el movimiento obrero expresaba la identidad de la diversidad de luchas sociales populares forjadas de forma creciente durante la década de 1960. Salió vencedor de todas sus grandes batallas durante esa década y fue imponiendo límites y condiciones que prefiguraron la moral que contendría años más tarde el programa de la Unidad Popular, e intentando, derechamente, experiencias de colectivización localizada. El ánimo de radicalización entre las

frangas organizadas del movimiento obrero de la década, y que permitía la promesa estratégica del allendismo, era un proceso que ocurría en la lucha de clases, que estaba atravesado por ella. No fue un proceso ideológico, sino que práctico, es decir, un proceso en que las ideas radicales surgían de la experiencia concreta de las conflictivas relaciones laborales del período.

En un artículo publicado hace algunos años (Thielemann, 2018), hemos identificado tres momentos en esta radicalización del movimiento obrero, que no consisten en fases sucesivas, sino en batallas políticas sucesivas en que se disputaban los grados de autonomía y poder del movimiento obrero frente a los patrones y al capital. De esta forma se fue nutriendo la imaginación de lo que podría ser realmente, más allá de las consignas, una “vía chilena al socialismo”. En primer lugar, a comienzos de la década de 1960, se produjo una intensificación de la explotación y un ataque al salario, por la vía de la implementación de medidas tayloristas. En el período, lejos de la posibilidad de conseguir trabajadores calificados en un corto plazo y sin inversión, los propietarios industriales decidieron echar mano a lo que había. Asumieron, entonces, la aplicación de métodos para intensificar el trabajo en las fábricas. caracterizados por una celosa vigilancia casi personalizada de tiempos y ritmos productivos. Estos métodos generaron una insoportable presión en algunos sectores del movimiento obrero, pues aumentaban el esfuerzo sin aumentar los salarios, a la vez que instalaban la indiferencia respecto de obreros más viejos y sus capacidades de trabajo, imponiendo metas individuales de producción como medida de la calidad de cada trabajador. Pero, por otra parte y como sugiere Peter Winn (1990), también aportó a la destrucción del paternalismo del patrón sobre los grupos obreros y a la empatía de clases construida en los primeros años del período desarrollista. Entre muchas consecuencias, es destacable cómo los conflictos por los cambios “tayloristas”, junto a las transformaciones salariales, tendieron a resituar el enfrentamiento de clases en el interior de la fábrica, la mina o el taller. A partir de las medidas tomadas por los gobiernos de Ibáñez y Alessandri, en los cuales se obligó de distintas maneras a las empresas a mejorar su productividad, la aplicación de medidas llamadas de “racionalización” de la producción fueron respondidas con fieras movilizaciones obreras. Fueron luchas estrictamente obreras, salieron de la tónica normal de pliegos de peticiones por salarios o por ciertas mejoras y buscaron proteger los puestos de trabajo en detrimento de las posibilidades de ganancia del propietario. Aunque implicaron pocos obreros respecto del total, y de solo algunas fábricas muy modernas y ubicadas en las ciudades más industrializadas, sus luchas tuvieron impacto nacional a través de la prensa. Las grandes huelgas del carbón y de MADECO–MADEMSA en 1960, la huelga de Yarur en 1962, entre otras del comienzo de la década, estuvieron motivadas por las llamadas “racionalizaciones”. La misma situación ocurrió en las minas del cobre, donde, en general, la conflictividad estuvo,

además de los salarios y la cuestión de la nacionalización, vinculada a las distintas formas de racionalizar la producción y reducir la cantidad de mano de obra (Barrera, 1978; Stillerman, 1994). A pesar de que nunca se aplicaron de forma total las medidas tayloristas de racionalización productiva, ni siquiera en una sola fábrica, la respuesta conflictiva de los obreros a estas ayudó a agudizar la tensión en las fábricas y a establecer una moral crítica del productivismo, centrada en el derecho al trabajo. Esta moral cruzó toda la idea de trabajo del allendismo, emergía en cada objeto cultural, en cada posición política. El gobierno de Allende, al construir balnearios populares para los trabajadores, sería el primero en Chile en pensar las vacaciones de forma afirmativa y no únicamente como tiempo productivo muerto.

En un segundo momento estuvo la forma que tomó la lucha salarial. El encuadre de la lucha salarial de la década colocaba en bandos opuestos a patrones y obreros, con el arbitraje del Estado, que en general era bastante parcializado por el gran empresariado. Los empresarios exigían al Estado usar su violencia y poder político para contener la exigencia obrera, mientras que las y los trabajadores dependían de las alzas salariales para cubrir una vida que carecía de subsidios o ayudas públicas de envergadura. De esta forma, la lucha salarial estaba al centro de la lucha de clases, pues enfrentaba a un capital industrial excesivamente sostenido en bajos salarios, altos subsidios estatales e sobreexplotación de la mano de obra, con un proletariado muy politizado y clasista, dependiente de los salarios. Y agudizaba la importancia del control político del gobierno, que definía el favor del Estado en la disputa. Así, la lucha salarial explicaba tanto la importancia de la estrategia institucional y de luchas sociales combinadas, como la necesidad de que Allende y la izquierda obrerista gobernaran Chile.

Desde su inicio mismo a fines de 1964, el gobierno de Frei Montalva buscó contener o bajar los salarios de la clase obrera, a la vez que intentaba desmontar el poder del sindicalismo frente a los patrones, para así detener la espiral de alzas salariales e inflación. Como hemos visto a fondo en un artículo reciente (Thielemann, 2019), en abril de 1965 el gobierno fijó el límite de alza salarial en la cifra de inflación del año anterior, el 38,4 por ciento. Los obreros respondieron. En mayo de 1965, el periódico de la CUT enumeraba 62 organizaciones sindicales que habían roto la barrera del 38,4 por ciento en sus respectivas huelgas. De las 62, treinta habían conseguido reajustes sobre el 50 por ciento y hubo cuatro que tuvieron reajustes del 100 por ciento. La prensa sindical celebraba estas alzas, demostrando que el discurso del gobierno no les hacía mella, y justificó la lucha por salarios más altos como un “problema de fondo en el desarrollo de la estructura económica”, el cual se solucionaba por la vía de “detener la injusta distribución de la renta nacional que posibilita que siendo los trabajadores el 48% de la población activa reciban apenas el 19% y que los 350 mil empresarios, patrones y rentistas se lleven más del 50%

de nuestro ingreso nacional” (Urge la solidaridad, 1965). Finalmente, las huelgas de 1965 y su tendencia a sobrepasar a punta de lucha obrera el límite de ajuste fijado por el gobierno, no terminaron sino con la masacre de El Salvador en marzo de 1966. El rol de la masacre estaba claro: contener la presión obrera, la “huelga irresponsable”, al costo que fuese necesario. El ataque no era solo al salario, sino al sindicalismo más obrerista, y al parecer, esto fue comprendido con claridad por las bases obreras. En 1966, la Democracia Cristiana (DC) quedó casi sin representación en el sindicato de El Salvador (Vergara, 2008), hecho que se repitió en varios sindicatos durante ese año y los siguientes. En 1967, el gobierno (DC) realizó un último intento de contener las reivindicaciones salariales del movimiento obrero: el ahorro forzoso del salario y el pago en bonos. El movimiento respondió con una huelga general en noviembre de ese año, que tuvo una fuerte participación en los sectores más radicales de las franjas organizadas de la clase trabajadora. Para enero de 1968, la política salarial de Frei Montalva estaba derrotada, los ministros de Economía y Trabajo dejaron sus puestos, y la iniciativa en general de la administración DC se detuvo o se volvió francamente conservadora. La frontalidad que alcanzaron los conflictos salariales hizo transparente la diferencia clasista con los patrones, a la vez que explicaba de por sí la necesidad para el movimiento obrero de contar con un gobierno afín a sus intereses. El allendismo, desde la lucha obrera por el salario, se explicó como la búsqueda de una armonía política entre el Estado y el movimiento obrero en pos de la mejora en la vida de lo que se consideraba el conjunto del pueblo chileno, del que los patrones, por supuesto, estaban excluidos.

Por último, pero a su vez de una importancia primera, hacia fines de la década se produjo una serie de ocupaciones de fábricas y otros centros productivos urbanos, que varias veces se mantenían y pasaban a constituir experiencias de control obrero. De esta forma, importantes sectores del movimiento obrero fueron intensificando el aspecto estratégico y vanguardista de la “acción directa” que venían practicando desde hacía años. Aunque no han sido registradas del todo, las tomas de fábricas comenzaron a expandirse antes del gobierno de la Unidad Popular, durante el segundo lustro de la década de 1960. En las luchas sociales, se apreciaba una popularidad de las prácticas de control territorial: los transportistas del Estado se tomaban las garitas de estacionamiento, obreros de la construcción se tomaban construcciones de viviendas, funcionarios públicos ocuparon oficinas y los estudiantes realizaron cientos de tomas de liceos y universidades en la década. Las tomas nacieron como forma de mejorar la posición obrera en la negociación salarial. Así ocurrió en la toma de la Población Manuel de Salas, que estaba en construcción y fue ocupada por obreros que allí trabajaban el día 5 de noviembre de 1962. Los 750 obreros, en dos días de toma y con amplio apoyo político y social, ganaron su petitorio salarial, devolviendo las viviendas y volviendo de inmediato al trabajo (Triunfaron los obreros que se apoderaron de población, 1962).

Durante la oleada de huelgas de 1965, se produjeron las exitosas ocupaciones de las fábricas Me Tigrít de Talcahuano en junio e INDURA de Santiago en noviembre, a modo de forzar las alzas salariales. La radicalización del movimiento obrero, fundamental en la forma que tomó el movimiento de masas que puso a Allende en La Moneda en 1970, pasó por una legitimación de las acciones directas que, más allá de argumentos ideológicos, se sostuvo en su utilidad práctica. La expansión de la toma en los registros policiales —de cinco en 1968 a 133 en 1970— da cuenta de la popularidad que adquiriría el instrumento en la medida que demostraba su eficacia. Esta utilidad práctica permitía, eso sí, sacar conclusiones de fuerte contenido político y, en el fondo, clasista. Así ocurrió en ejemplos de control obrero, como la empresa COOTRALACO, controlada por sus obreros y dirigida por militantes que antes ya habían participado en el frustrado intento de huelga y toma expropiatoria en la fábrica SABA en 1968. En COOTRALACO los trabajadores no solo mantenían control obrero, sino que desarrollaron experiencias que se anticiparon en varios años a las de los Cordones Industriales. Allí, la familia protagonizaba parte de las asambleas semanales que tenía el colectivo obrero de la fábrica. Con el tiempo, los galpones de la fábrica y sus patios se convirtieron en una especie de centro comunitario, que albergaba una clínica médica y dental gratuita construida por los obreros, militantes, activistas y habitantes del barrio. La proletarización de las fábricas bajo control obrero no fue solo un fenómeno de masividad, sino también de apropiación territorial (Morris, 1973).

La confirmación de la legitimidad democrática de la toma de fábrica estuvo en el intento de golpe de Estado del 21 de octubre de 1969. Ese día, la CUT llamó a la ocupación de fábricas estratégicas para detener el golpe y defender la democracia. Cuando la asonada militar fue derrotada ese mismo día, Frei Montalva agradeció el compromiso del movimiento obrero, al igual que todo el arco político. Los obreros, aunque con un fuerte compromiso democrático, también tenían sus propias razones. Probablemente, en varios casos la coyuntura que avaló la toma de fábricas permitió resolver conflictos laborales a favor de los obreros, y algunos recintos no fueron devueltos sino hasta el día 24, cuando las cosas quedaron claras. Un mes más tarde se firmó el primer acuerdo salarial entre el gobierno y una central sindical en la historia de Chile. Si bien el acuerdo fue criticado por sectores obreros de izquierda por su insuficiencia, en sí era una demostración de la ciudadanía ganada por la CUT vía ocupaciones. Las tomas fueron así reconocidas como una forma de ejercicio ciudadano de la clase obrera.

El movimiento obrero que estaba en lo hondo del crisol popular allendista, para 1970, ya tenía suficientes imágenes de cómo podría realizarse aquello del “poder popular”. Puede que no haya sido una estrategia de bordes finos, sino más bien de formas toscas, pero, sin duda, era una estrategia que dio por una década muestras de

que se trataba de algo más grande que de “cambiar un presidente”. Cuando Allende llegó al poder, él y la izquierda habían cumplido con su parte de la estrategia. Por su parte, los obreros textiles de ciudades como Tomé o Santiago, los mineros del cobre en El Salvador y Chuquicamata, y también la industria pesada de la zona sur de la capital, entre otros cantones obreros, se lanzaron a la toma de sus lugares de trabajo, en busca de lo que hasta ese momento eran una miríada de intentos y ensayos: la construcción del socialismo desde el suelo de la fábrica y hasta el cielo.

#### IV

El voto de zonas obreras por Allende en 1970 no deja lugar a dudas respecto de la identidad clasista de la Unidad Popular. En las provincias mineras del norte, así como en aquellas fuertemente obreras del sur, como Concepción y Arauco, su votación rondó el 50 por ciento. Como han demostrado James Petras y Maurice Zeitlin (1968, 1969), la fuerte militancia obrera propalaba la izquierdización del voto campesino, tradicionalmente más conservador que sus pares trabajadores de la ciudad, elevándola sobre el promedio rural. La movilización electoral de las franjas obreras y su empuje del voto campesino cercano, no fueron una mera consecuencia de las acciones de la campaña de la Unidad Popular, sino, más bien, un genuino movimiento que empujaba desde la base por sus propios motivos. Como se ha indicado, para buena parte del movimiento obrero, el allendismo era la alternativa electoral que permitía confirmar en las instituciones del gobierno del país lo que ellos ya habían ido conquistando en las luchas laborales de la década de 1960.

De esta forma, es importante destacar que el movimiento obrero tuvo una importancia fundamental en el triunfo electoral de 1970, movilizándolo al universo proletario que se organizaba o referenciaba en torno a ellos y sus luchas. No solo eso, además, fue capaz de ir construyendo la forma concreta de lo que en muchos casos no eran más que consignas o elementos programáticos sin mayor desarrollo técnico. Así ocurrió con la idea de gobierno de los trabajadores, que se fue planteando como uno que se ponía del lado de la clase obrera en la lucha de clases, que no reprimía las huelgas y que protegía los derechos sindicales; también con la idea de poder popular, que se concretó en el control territorial clasista de barrios, primero, y centros productivos, después. Así, el movimiento obrero, en la elección de Allende en 1970, tuvo el rol de ser el alma de clase y a la vez la prueba de que el proyecto era posible, y aquello venía proyectándose desde las distintas insubordinaciones populares de masas que comienzan con la revuelta de 1957.

Siguiendo la metáfora de Tomás Moulian (1993), la fiesta de la Unidad Popular tuvo por epicentro en las ciudades a las fábricas, que desde 1972 fueron los centros

sociales de los Cordones Industriales, que a su vez eran el corazón del imaginario revolucionario de la parte final del gobierno de Allende. El drama trágico del trienio tuvo su propia vida entre los galpones y talleres, donde se definió la disputa secular entre la revolución socialista y el golpismo oligárquico, en especial durante el paro patronal de octubre de 1972. La derrota, finalmente, comenzó dos meses antes del golpe de Estado, cuando el gobierno permitió, buscando contener la asonada militar, que el Ejército aplicase la recién promulgada Ley de Control de Armas para hostigar, primero, y desarticular, después, a los grupos obreros más radicales en las fábricas. La violenta ofensiva final de la oligarquía chilena atacó, como es conocido, el Palacio La Moneda; pero también estuvo entre sus primeros objetivos la eventual resistencia obrera. Los empresarios que se reconocieron en el golpismo sabían que estaban frente a un movimiento que no respondía a simples entusiasmos o a un caudillismo carismático, sino a una estrategia política propia, construida en una historicidad conocida y que le daba una densa identidad clasista a la Unidad Popular. Ese rol central en las elecciones de 1970 y en el gobierno hasta 1973, ha permanecido opacado históricamente por la sombra de partidos y estrategias, así como de los movimientos campesinos y de pobladores que exhibían prácticas espectaculares, aunque no del todo más radicales que las de los obreros. Es necesario reconocerla como un rol asumido, consciente, de racionalidad de clase y a ras de piso, que aportó el bando social más y mejor organizado del campo popular. Sin ello, la Unidad Popular tal vez no habría sido un gobierno revolucionario, sino solo un gobierno de izquierda más.

## REFERENCIAS

- ARRATE, J., y Rojas, E. (2003). *Memoria de la Izquierda chilena (Tomo I: 1850 – 2000)*, Santiago: Javier Vergara Editor.
- BARRERA, M. (1978). El conflicto obrero en el enclave cuprífero chileno. *Revista Mexicana de Sociología*, 40(2), pp. 609-682.
- CORTÉS, A. (2014). El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: Ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad. *Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales*, 40(119). Disponible en: <http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/366>
- DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (1964). *Características básicas de la población (censo 1960)* (Vol. 1). La Dirección de Estadística y Censo. Disponible en: <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:86206>
- FERNÁNDEZ ABARA, J. (2015). Allende, el allendismo y los partidos: El Frente de Acción Popular ante las elecciones presidenciales de 1958. *Izquierdas*, 23, pp. 157-190.
- GONZALES TORRES, R., y DAIRE TOLMO, A. (1984). *Los paros nacionales en Chile, 1919-1973*. Centro de Asesoría Profesional, Área Comunicaciones.
- MILOS, P. (2007). *Historia y memoria: 2 de abril de 1957*. Santiago: LOM Ediciones - Universidad Alberto Hurtado.
- MORRIS, D. J. (1973). *We must make haste--slowly: The process of revolution in Chile*, Vintage Books.
- MOULIAN, T. (1993). *La Forja de ilusiones: El sistema de partidos, 1932-1973*. Universidad ARCIS: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- PETRAS, J., y ZEITLIN, M. (1968). Agrarian Radicalism in Chile. *The British Journal of Sociology*, 19(3), pp. 254-270.
- ROSSANDA, R. (18 de octubre, 1971). Rossana Rossanda entrevista Salvador Allende. *il manifesto*. Disponible en: <https://ilmanifesto.it/rossana-rossanda-intervista-salvador-allende/>
- STILLERMAN, J. (1994). El ‘día-D’ en Madeco: La huelga de 1960: Sus causas, consecuencias y significados. *Crisol*, 5, pp. 18-34.
- THIELEMANN, L. (2018). La rudeza pagana: Sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957 – 1970. *Izquierdas*, 44, pp. 114-133.



- (2019). La perspectiva parcial: El movimiento obrero frente a la política salarial del gobierno de Frei Montalva, 1964-1967. *Economía y Política*, 6(1), pp. 85-116.
- TRIUNFARON LOS OBREROS QUE SE APODERARON DE POBLACIÓN (6 de noviembre, 1962). *Las Noticias de Última hora*.
- URGE LA SOLIDARIDAD (junio, 1965). *Central Única*, p. 3.
- VERGARA, A. (2008). *Copper workers, international business, and domestic politics in Cold War Chile*. Pennsylvania State University Press.
- WINN, P. (1990). El taylorismo y la gran huelga de Yarur de 1962. *Proposiciones*, 19, pp. 202-223.
- ZEITLIN, M., & PETRAS, J. (1970). The Working-Class Vote in Chile: Christian Democracy versus Marxism. *The British Journal of Sociology*, 21(1), pp. 16-29.